


## Continúan las protestas contra el Decreto de ajustes del Consell

- 
- 
- 
- 

[0](#)

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 **Doble clic** sobre cualquier palabra para ver significado

3 Febrero 12 - - C. B.

VALENCIA- Un mes después de que el Gobierno valenciano aprobara el Decreto-ley de ajustes del gasto público, continúan las movilizaciones sociales. Ayer, más de 200 abogados de oficio de toda la Comunitat se manifestaron frente al Palau de la Generalitat para defender el derecho a la justicia gratuita y denunciar el recorte que ha sufrido el servicio, según ellos, del 37 por ciento.

También exigieron el pago de la deuda que el Consell mantiene desde marzo de 2011 con el turno de oficio y que cuantificaron de más de diez millones de euros.

Fuentes de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social afirmaron que el colectivo está en su derecho de protestar. Sin embargo, la preocupación del Departamento es conocer si los abogados dejarán de prestar servicios que han sido pagados de antemano. En este sentido, solicitaron al Consejo Valenciano de Abogados (CVCA) información relativa a una posible supresión de los servicios.

Según el secretario del Consejo, José Andujar, el Ejecutivo autonómico mantiene una actitud negativa y no es proclive a ningún acuerdo.

En esta misma línea, los Colegios de Enfermería de la Comunitat han establecido un Observatorio Enfermero Sanitario para que los enfermeros puedan hacer propuestas alternativas a los recortes en materia de sanidad. El Consejo explicó que la Conselleria les envió un documento con dichas medidas y además les dio la posibilidad de ofrecer otras opciones.

Por su parte, delegados de Intersindical Valenciana retiraron ayer 100 euros de sus cuentas corrientes como acción de protesta contra los bancos, a los que consideran los «grandes culpables» de la crisis económica».

En Alicante, el comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), afirmó que la plantilla está preparada para operar la línea 2 del tranvía, cuyas obras finalizaron hace un año y que sigue a la espera de la adjudicación. Apuntó que podría gestionarla la empresa pública.